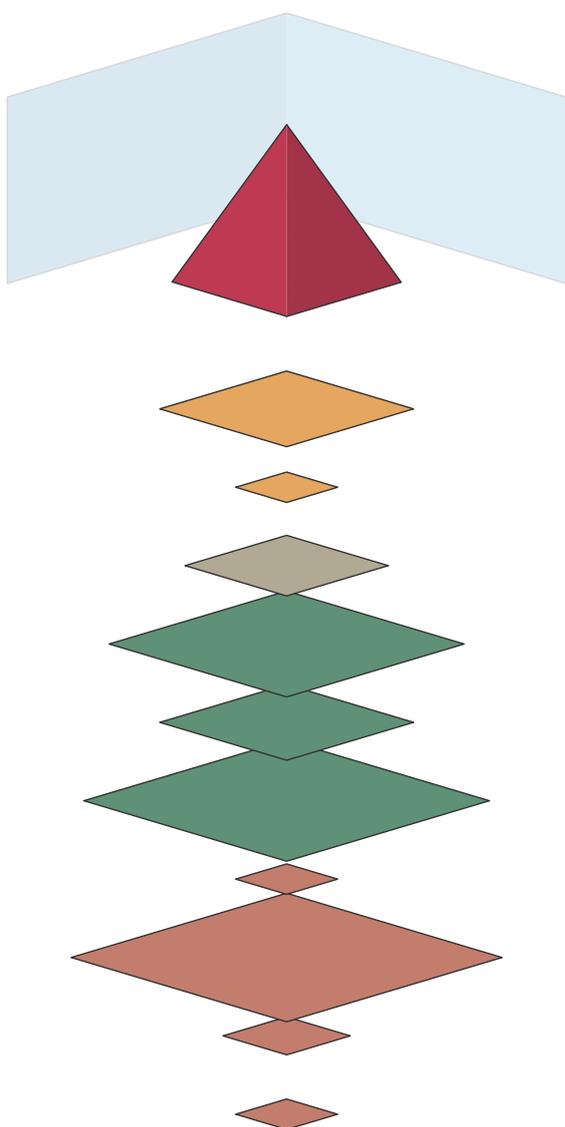



BOLIVIA




4,30
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

131.º de 193 países
24.º de 35 países americanos
11.º de 12 países de América del Sur


MERCADOS CRIMINALES **4,60**

TRATA DE PERSONAS	5,00
TRÁFICO DE PERSONAS	2,00
TRÁFICO DE ARMAS	4,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	7,00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	5,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	8,00
COMERCIO DE HEROÍNA	2,00
COMERCIO DE COCAÍNA	8,50
COMERCIO DE CANNABIS	2,50
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	2,00


ACTORES CRIMINALES **4,00**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	3,50
REDES CRIMINALES	2,00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	6,00
ACTORES EXTRANJEROS	4,50


4,88
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

95.º de 193 países
19.º de 35 países americanos
7.º de 12 países de América del Sur



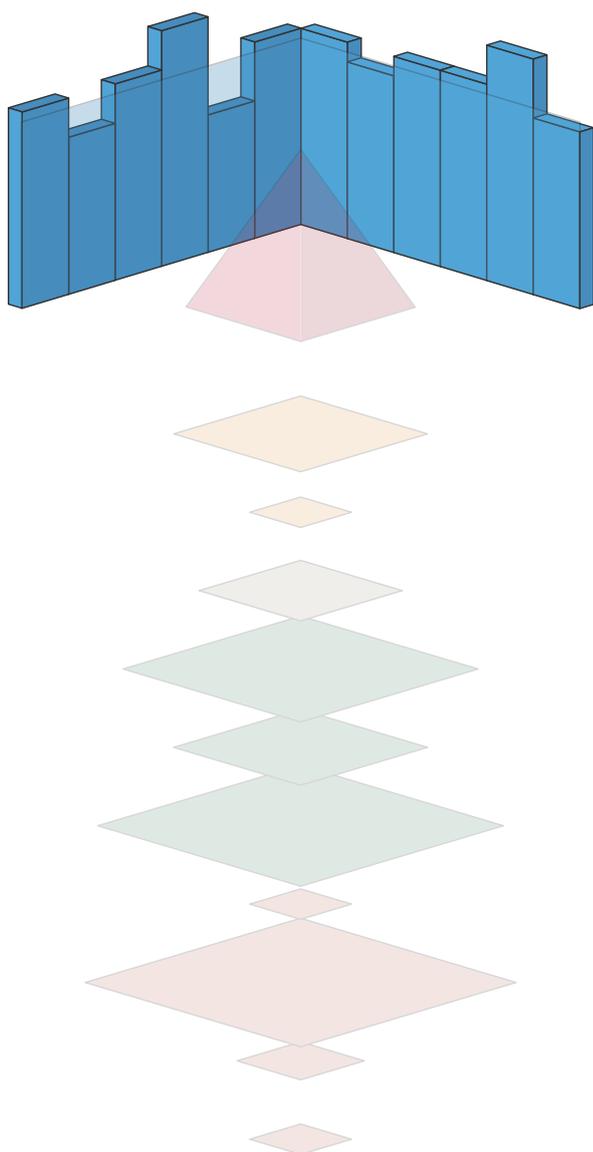
Financiamento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).



BOLIVIA



4,88

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

95.º de 193 países
19.º de 35 países americanos
7.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	5,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5,00
PREVENCIÓN	6,00
ACTORES NO ESTATALES	4,50



4,30

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

131.º de 193 países
24.º de 35 países americanos
11.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 4,60



ACTORES CRIMINALES 4,00



Financiamento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Bolivia es un país de tránsito y destino de víctimas de la trata de personas provenientes de África, Chile y las Islas del Caribe. Ciudadanos bolivianos, principalmente mujeres y niños, también son objeto de trata de personas hacia Argentina, Brasil, Panamá y Chile. Las víctimas son objeto de mendicidad forzada, explotación sexual y tráfico de órganos por parte de mafias nacionales y transnacionales. La prostitución forzada y el trabajo infantil están generalizados en los asentamientos mineros ilegales de Bolivia y Perú, y mujeres bolivianas también son explotadas en la ciudad turística de Piura. Redes criminales locales controlan a las víctimas y se sabe que amenazan a sus familiares, así como a funcionarios públicos.

Si bien el tráfico de personas no es significativo en Bolivia, el mercado interactúa con otros mercados criminales, como el tráfico de drogas y la trata de personas. Bolivia es un país de tránsito para ciudadanos africanos traficados a Estados Unidos, así como un país de tránsito y destino para personas traficadas desde Chile y las Islas del Caribe.

TRÁFICO

Grupos de traficantes de armas, predominantemente de Brasil y Paraguay, utilizan a Bolivia como un país de tránsito. La ruta del tráfico internacional de armas comienza en Miami, en Estados Unidos, y fluye a través de República Dominicana hacia Perú o Chile y a través de Bolivia, siendo Brasil o Paraguay los destinos finales. Sin embargo, las armas también son accesibles para los grupos locales. Los grupos criminales que operan en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú pueden intercambiar armas en los pasos fronterizos y se sabe que las organizaciones criminales arman a sus miembros y asaltan las bases militares bolivianas. Este mercado es clave para otras operaciones de mercados criminales, incluyendo el tráfico de drogas, y puede ser facilitado por la corrupción de bajo nivel. Además, se ha visto un aumento de la violencia, frecuentemente relacionada con la actividad delictiva, especialmente en las ciudades.

MEDIOAMBIENTE

Bolivia tiene uno de los niveles de deforestación más altos del mundo, como resultado de la tala ilegal y el desmonte de tierras para la agricultura y la ganadería, impulsado por las exportaciones a China. El departamento de Santa Cruz es actualmente el área más deforestada, pero el trabajo forzado de madereros también ocurre en la selva amazónica, donde las actividades ilegales afectan a las tribus indígenas y han resultado en el asesinato de líderes y activistas indígenas. Bolivia tiene un déficit comercial de madera, debido, en parte, al tráfico ilícito que se ve facilitado por la escasa infraestructura,

la corrupción y la falta de equipamiento para los guardaparques. En la región del Amazonas, los guardabosques desarmados realizan tres patrullas al año, cuando los madereros suelen ir armados con carabinas. Bolivia es también un país de origen, destino y tránsito de especímenes de vida silvestre de países vecinos, lo que posiblemente facilita el comercio ilegal de vida silvestre entre Brasil y Perú. Se trata principalmente de especímenes vivos para el comercio de mascotas y productos para consumo, uso tradicional o festividades religiosas, entre los que se encuentran lagartijas, tortugas de agua dulce, loros, llamas, vicuñas, así como lana o carne de alpaca. La mayoría de las importaciones ilegales de fauna, como las de aves, se comercializan en el mercado local o en Facebook y el contrabando está facilitado por la permeabilidad de las fronteras, la permisividad de las leyes y la aceptación social.

Los principales delitos relacionados con los recursos no renovables en Bolivia son la minería ilegal y el contrabando de gas natural y gasolina a los países vecinos. En lo que se refiere a esta última actividad, el microtráfico hacia Perú, Chile, Brasil y Paraguay es significativo. La minería de oro es parte de la cultura tradicional boliviana y los principales actores criminales son los mineros ilegales locales o *jukus*, quienes reclutan a mineros legítimos o sobornan a oficiales para que les permitan robar metal o herramientas de las minas y generalmente contrabandean oro peruano a mercados de mayor tamaño. La minería ilegal ocurre principalmente en lugares donde prevalecen la violencia y otros delitos, como el tráfico de personas, drogas y armas. El oro es transportado ilegalmente por mulas en vehículos blindados, motocicletas y aviones.

DROGAS

En Bolivia, el tráfico de heroína palidece en comparación con el cannabis, la droga más consumida, y la cocaína, que es la droga más producida y traficada. Bolivia es uno de los principales productores de cocaína del mundo y es legal cultivar y consumir hojas de coca por motivos culturales. Bolivia también es un país de tránsito para la cocaína peruana y colombiana. Debido a que el consumo interno de cocaína es bajo, la mayor parte de las ganancias proviene de la demanda externa. Cáteles mexicanos y colombianos controlan las rutas de tráfico hacia Chile, Paraguay, Brasil y Argentina, desde donde la cocaína también se envía a Europa. Sin embargo, las organizaciones criminales bolivianas también están involucradas en el contrabando de pasta base de coca a Brasil, Argentina y Paraguay, a veces por vía aérea. La violencia vinculada a la cocaína ha aumentado significativamente en algunas ciudades y regiones, como Santa Cruz, pero el cultivo de coca también ha servido de sustento a los sectores más pobres durante las recesiones pasadas.

Aunque el cannabis es la droga ilegal consumida con mayor frecuencia, solo una fracción del mercado está cubierta por

la producción local. Por lo tanto, Bolivia también es un país de tránsito y destino para el cannabis y organizaciones colombianas facilitan el tráfico a través de Perú, mediante una estructura descentralizada de mano de obra contratada. Pequeños grupos familiares en el departamento de Tarija transportan cannabis a través de la parte sur del país, principalmente desde Paraguay hasta el norte de Chile, y grupos informales de bajo nivel gestionan el comercio local. El consumo de drogas sintéticas es bajo y los productos farmacéuticos, como el tramadol, las benzodiazepinas y las anfetaminas, requieren prescripción médica y son relativamente costosos. Estas sustancias ingresan desde Brasil y Argentina, convirtiéndose a Bolivia en un país de tránsito. Últimamente, el LSD chino ha entrado en el mercado y ha habido un aumento del consumo en las escuelas secundarias de élite.

ACTORES CRIMINALES

Los líderes de los clanes de la droga, así como sus familiares y aliados, han ocupado cargos políticos en el país y la Policía boliviana y otras instituciones están involucradas en la corrupción, el soborno y el narcotráfico en todos los niveles. Los principales destinatarios de los sobornos son el Poder Judicial, la Policía y las aduanas. La corrupción de bajo nivel ligada al tráfico de personas y drogas aumentó con la falta de supervisión civil durante el Gobierno interino de Jeanine Añez (2019–2020). La falta de capacidad y de recursos socava las instituciones, mientras que los bajos salarios y una burocracia

con demasiado personal y poco profesionalismo crean incentivos para la corrupción, el clientelismo y el favoritismo.

Los principales actores criminales extranjeros en Bolivia incluyen al Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho, las Bandas Criminales (BACRIM), el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el grupo mafioso italiano 'Ndrangheta. El PCC envía emisarios a través de la extensa frontera con poca vigilancia y mantiene un acuerdo con el Comando Vermelho respecto a los departamentos de Santa Cruz y Pando. Además, debido a la corrupción y la ausencia de instituciones estatales, San Matías es parte de un importante corredor de tráfico de drogas para la cocaína boliviana que ingresa a Brasil. Mientras tanto, las BACRIM controlan los laboratorios bolivianos de procesamiento de cocaína y las rutas de tráfico desde Perú a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Los productores bolivianos venden principalmente la base de coca y actores colombianos y brasileños controlan el proceso de refinamiento. Aunque los grupos de tipo mafioso extranjeros utilizan a Bolivia para la compra o el tránsito de drogas, no controlan el territorio ni tienen una presencia permanente de alto nivel. Si bien las organizaciones locales son más pequeñas y fáciles de reemplazar, los clanes familiares en el departamento de Beni, como los clanes Candia Castedo, Lima Lobo y Rodríguez, han existido durante décadas y mantienen relaciones cambiantes con organizaciones internacionales. Controlan el transbordo de pasta base en avionetas destinadas a Brasil, Argentina y Paraguay, para el consumo local o su exportación a Europa y África del Norte.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

La política de drogas «Coca sí, cocaína no» iniciada por el expresidente Evo Morales se centró en la legalización y la industrialización de las plantaciones de hoja de coca. Las políticas anteriores de erradicación forzosa condujeron a abusos de los derechos humanos y el enfoque de Morales reconoció que la participación de los agricultores en el comercio ilícito se debe principalmente a necesidades económicas. Morales vio deficiencias en la administración de justicia y en los servicios de salud y, en general, el Gobierno demostró su oposición al crimen organizado y a la corrupción. Sin embargo, los escándalos de corrupción, los desafíos de organización y la falta de acción socavaron el éxito de las políticas. En su cuarto mandato, Morales anunció la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción para complementar el trabajo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Los derechos humanos fueron severamente amenazados bajo el Gobierno interino de Jeanine Añez tras la renuncia de Morales, incluyendo mediante la aprobación del uso de la fuerza letal contra manifestantes no violentos a favor de Morales y la promulgación de un decreto supremo que eliminó importantes limitaciones a las acciones permitidas a las

fuerzas de seguridad. El nuevo Gobierno de Luis Arce, elegido en noviembre del 2020, ha frenado la influencia de Morales. La inestabilidad política provocada por los cambios abruptos de gobierno en los últimos dos años ha generado incertidumbre y un cierto grado de discontinuidad en las políticas públicas. En general, Bolivia se desempeña por debajo de los promedios regionales en términos de gobernanza y existe evidencia de que narcotraficantes han ocupado cargos políticos clave.

Bolivia tiene tratados de extradición con Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Bélgica, Estados Unidos, España, Brasil, México, Reino Unido, Portugal, Venezuela, Perú y el Mercosur. Durante la presidencia de Morales, Bolivia no extraditó criminales a Argentina y Brasil y surgieron inquietudes sobre los retardos judiciales que beneficiaban a los acusados. A pesar de que en el 2008 Morales expulsó del país a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, hasta el año 2019 Bolivia participó activamente en acuerdos regionales e internacionales en materia de drogas y comercio. Aunque el Gobierno interino reabrió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se teme que esto afecte negativamente el mercado legal de la coca. Si bien el Estado forma parte de

acuerdos internacionales para combatir el crimen organizado, su observancia es insuficiente. Por ejemplo, los oficiales bolivianos que trabajaban con INTERPOL eliminaron la notificación roja de uno de los narcotraficantes más buscados en Bolivia. La legislación nacional boliviana cubre la trata y el tráfico de personas, el narcotráfico, la producción de coca, los delitos contra la flora y la fauna, el tráfico de armas y los delitos relacionados con los recursos no renovables, aunque existen debilidades con respecto a los delitos contra la flora y los recursos no renovables. Si bien la tala constituye un delito, el tráfico o el transporte de madera ilegal son solamente infracciones administrativas. En cuanto a los delitos relacionados con los recursos no renovables, la ley podría estar promoviendo la minería ilegal al otorgar derechos a cualquier persona que solicite un área para su explotación, sin considerar a las comunidades indígenas como actores de la minería. Debido a que es relativamente fácil conseguir un permiso para explotar minas, los mineros no cumplen las normas de explotación, laborales ni medioambientales. Cabe destacar que la ley boliviana que legaliza las plantaciones de coca es un ejemplo único de legislación que ha dado mejores resultados que las de Colombia y Perú.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial boliviano se considera un obstáculo para la lucha contra el crimen, debido a los retrasos en los procedimientos penales y a la corrupción generalizada de abogados, fiscales y jueces, que se aprovechan de las víctimas. El grave hacinamiento en las cárceles se ve agravado por las detenciones arbitrarias y por motivos políticos. La mayoría de los presos están en prisión preventiva y todo el sistema penitenciario adolece de falta de personal médico y de seguridad. La proporción entre agentes de Policía y ciudadanos también está por debajo de los estándares internacionales, como resultado de la injerencia política, los bajos salarios y pensiones, las malas condiciones de trabajo y la formación inadecuada. Existe una serie de unidades especializadas para el crimen, el narcotráfico y los delitos ambientales, pero, a pesar de que su presupuesto anual ha aumentado, los problemas siguen persistiendo, debido a la falta de equipamiento, así como a la corrupción. En general, la percepción pública de la Policía es negativa. El país comparte fronteras con Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile. Sin embargo, a pesar de las inversiones realizadas, la mayoría de las fronteras son altamente vulnerables, con muchos puntos de cruce irregulares disponibles para facilitar los flujos ilegales.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Bolivia es uno de los países más pobres de la región, con un crecimiento que depende en gran medida de la inversión del Gobierno y de los ingresos generados por los hidrocarburos, y posee una de las economías informales más grandes del mundo. El país corre un riesgo significativo de lavado de dinero y financiación del terrorismo; la unidad de investigaciones financieras del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el organismo encargado de controlar el lavado de dinero. En el 2012, Bolivia creó un Consejo Nacional de Lucha contra

el Lavado Ilícito de Ganancias, encargada de establecer directrices y políticas para combatir mejor el lavado de dinero y, en el año 2013, se crearon nuevos procedimientos normativos que permiten congelar y confiscar ganancias producto de actividades delictivas. Los tribunales penales bolivianos tienen jurisdicción sobre el lavado de dinero y los delitos relacionados y pueden solicitar información a los bancos con fines de investigación.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Según la ley boliviana, la protección de víctimas y testigos recae en la Fiscalía General, la Policía y el Ministerio de Justicia. Existe una oficina del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima en cada departamento del país. En cuanto a la prevención, la política de control social de la coca ha sido alabada por reducir el cultivo y la violencia; sin embargo, su futuro sigue siendo incierto. Mientras tanto, las iniciativas de las Naciones Unidas en Bolivia se centran en la coca, el desarrollo, la salud y la supervisión de medicamentos, la prevención, el crimen organizado, la corrupción y la reforma de la justicia penal. Cabe destacar que también existen en el país esfuerzos por promover la protección de la vida silvestre y contrarrestar la trata de personas. Un consejo presidido por el Ministerio de Justicia fue responsable de coordinar los esfuerzos contra la trata de personas a nivel nacional. Sin embargo, debido a la falta de atribuciones claras y diferenciadas con respecto a las demás unidades involucradas en la lucha contra la trata de personas, la cooperación en la materia ha sido deficiente. No obstante, en el año 2020 se implementó un plan de acción nacional y se avanzó en el desarrollo del plan de acción nacional para el periodo 2021-2025. Varias organizaciones de la sociedad civil han señalado que bajo el Gobierno de transición han disfrutado de una mayor cooperación con los funcionarios del Gobierno en cuestiones de trata de personas. El desarrollo de un registro nacional que obliga a las agencias de empleo a documentar sus actividades ha reducido con éxito la explotación de los trabajadores por parte de las mismas.

Los medios de comunicación son el principal actor no estatal en la denuncia de la corrupción y la delincuencia, pero existe poco periodismo de investigación y los relatos pueden ser sensacionalistas o basarse en información no verificada. Se han producido cada vez más ataques contra periodistas y medios de prensa locales y los medios de comunicación están bajo una fuerte presión estatal para evitar críticas al Gobierno y al presidente.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.